

# **VIOLENCIA Y AUTORITARISMO EN EL PERÚ:** **bajo la sombra de Sendero** **y la dictadura de Fujimori**

**Segunda edición ampliada**

**Jo-Marie Burt**

Traducido por

**Aroma de la Cadena y Eloy Neira Riquelme**



**epaf**  
equipo peruano de  
antropología forense

***IEP Instituto de Estudios Peruanos***

# Contenido

Prefacio a la segunda edición.....	11
Agradecimientos.....	17
Introducción .....	23
<b>Parte I. Formación y deformación del Estado</b>	
1. El Estado débil .....	61
2. Las consecuencias sociales de la descomposición del Estado .....	87
3. El terror contra el terror .....	105
4. La crisis de la política organizada.....	129
<b>Parte II. Las zonas grises y la subversión: Sendero Luminoso y la batalla de Lima</b>	
5. Los cinturones de hierro de la miseria.....	161
6. En las zonas grises: los estados de Sendero Luminoso.....	179
7. La batalla de Villa El Salvador .....	215
<b>Parte III. La construcción del Estado en contra de la democracia: el proyecto autoritario del fujimorismo</b>	
8. La reconstitución autoritaria del Estado.....	267
9. Quien habla es terrorista: la política del miedo.....	315
10. El Estado autoritario y el resurgimiento de la sociedad civil .....	351
<b>Parte IV. El juicio a Alberto Fujimori por violaciones de los derechos humanos</b>	
11. “¿Está probado que Fujimori es culpable? Sí, lo está”.....	399

Bibliografía.....	435
Lista de ilustraciones .....	473
Lista de cuadros .....	473
Siglas y acrónimos.....	474

## Prefacio a la segunda edición

Escribo este prefacio a la segunda edición de *Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori* en la víspera de la segunda vuelta electoral para las elecciones presidenciales, que tendrá lugar el 5 de junio de 2011. La hija de Alberto Fujimori, Keiko, ha pasado a la segunda vuelta, y enfrentará al ex militar Ollanta Humala para ocupar la Presidencia del Perú.

El ascendiente de Keiko Fujimori demuestra que el fujimorismo logró sobrevivir un tiempo en el desierto, luego de la huida de Alberto Fujimori en noviembre de 2001 ante el inminente colapso de su régimen y su probable arresto por corrupción y otros crímenes, no obstante lo cual ha logrado consolidar una presencia política importante. Pero no por ello debemos olvidar que decenas de ministros, militares, hombres de negocios y otros colaboradores del régimen purgaron prisión o aún cumplen penas por varios delitos cometidos durante los años noventa, cobijados por el régimen fujimorista. El ex comandante de las Fuerzas Armadas en un amplio periodo del fujimorato, el general (r) Nicolás de Bari Hermoza Ríos, ha sido condenado a 25 años por la masacre de Barrios Altos y también por graves actos delictivos. El fiel asesor de Fujimori, el ex capitán de las Fuerzas Armadas Vladimiro Montesinos Torres, también ha sido sentenciado por múltiples casos de corrupción,

tráfico de armas y violación de los derechos humanos. El mismo Fujimori —como analizo en un nuevo capítulo escrito para esta segunda edición del libro— fue extraditado al Perú en 2007, sometido a un juicio internacionalmente reconocido como imparcial y respetuoso del debido proceso, y condenado a 25 años de prisión por su rol como autor mediato de los crímenes de Barrios Altos, La Cantuta y los secuestros a manos del Servicio de Inteligencia del Estado (SIE). ¿Cómo explicar entonces que su hija —que ha reivindicado el gobierno de su padre como “el mejor de la historia del Perú”— tenga buenas posibilidades para llegar a la Presidencia?

En estas breves líneas no es posible resolver dicha pregunta, pero sí recogeré algunas ideas presentes en mi libro que puedan contribuir a desarrollar un análisis desapasionado del presente escenario. A primera vista, lo que más resalta son las diferencias entre el contexto en el cual el fujimorismo llegó al poder en 1990 y la situación actual: Cuando Fujimori fue elegido en 1990 el país se encontraba en una situación de desintegración política, económica y social; hoy en día el Perú goza de una buena condición macroeconómica, sus instituciones políticas parecerían estar consolidadas; y si bien aún persiste la pobreza, la sociedad tiene mejores oportunidades para progresar en comparación con hace 20 años, e incluso ha recuperado cierto dinamismo para realizar demandas ante el Estado.

Pero mirando un poquito más a fondo no es difícil darse cuenta de que para muchos peruanos todo eso es ilusión. La bonanza económica es real, pero solo ciertos sectores se benefician de ello; el prometido ‘choffee hacia abajo’ de los dioses neoliberales no se materializó. Los derechos laborales, brutalmente recortados durante el régimen fujimorista, no han sido repuestos en democracia. Y si bien el nivel escandaloso de pobreza de los años noventa ha disminuido, hay todavía altos indicios de pobreza, y la desigualdad ha ido en aumento.

En cuanto a la política, desde la transición en el año 2000 se han ido consolidando ciertos aspectos de la gobernabilidad democrática (como tener elecciones limpias y transparentes). Mas aún se mantiene una Constitución impuesta por una dictadura, luego del autogolpe del 5 de abril de 1992 y la creación de un Congreso —unicameral y bastante servil al Poder Ejecutivo. Hoy en día, a pesar de los intentos de consolidar el Estado de derecho y fortalecer la separación de poderes, hay bastante

evidencia de la interferencia del Poder Ejecutivo en los otros poderes del Estado (los ‘Petroaudios’, son buen ejemplo), y que para la mayoría de los peruanos y peruanas se mantiene la percepción de un Estado distante y desinteresado en resolver sus problemas; solo basta ver la permanente erupción de conflictos sociales en el Perú para darse cuenta de ello. La institucionalidad política —desde las instituciones del Estado hasta los partidos políticos— sigue siendo muy débil, y el discurso de la “antipolítica”, tan cuidadosamente construido durante el fujimorato, tiene utilidades para quienes detentan el poder o aspiran a él y no quieren tener instituciones sólidas que les puedan controlar y pedir rendición de cuentas. Y si bien existe una sociedad civil reactivada y dinámica, sigue siendo reducida mientras muchos sectores del país continúan inmersos en la pobreza y prefieren dádivas de algún benefactor —sea el Estado o un cacique local— ya que tienen muy poca posibilidad de organizarse y de ser escuchados por el Estado. El párrafo final de la primera edición del libro reseña ese problema directamente:

De no contarse con un Estado más democrático que asegure una rendición de cuentas horizontal —donde los diferentes poderes del Estado mantienen su independencia y se vigilan mutuamente—, y una sociedad civil más sólida e independiente para exigir transparencia en el manejo de la cosa pública y mantenerse alerta ante nuevos abusos de poder... seguramente nos esperan nuevos ciclos de conflicto e impugnación y, posiblemente, nuevos despotismos. (2009: 390)

Otro elemento fundamental que ayuda a entender el momento actual, es el hecho de que la violencia política produjo cambios importantes en los sentidos políticos y sociales en el Perú. La amenaza de Sendero Luminoso generó un profundo miedo en la sociedad peruana, que fue aprovechado desde el Estado y las élites, especialmente durante el fujimorismo, instrumentalizándolo para justificar las atrocidades más graves como la masacre de Barrios Altos (“eran terroristas”) o la desaparición de los estudiantes de La Cantuta (“fueron los que pusieron la bomba de Tarata”), así como la consolidación de un proyecto autoritario que tenía como finalidad mantener a Fujimori y a sus socios en el poder. Eso se detalla con detenimiento en el capítulo 9 del libro, titulado “Quien habla es terrorista”. Cuántas veces en los últimos años de investigación

sobre el juicio a Fujimori y los otros juicios contra perpetradores de violaciones de los derechos humanos he escuchado los mismos argumentos de los años 90. Un solo ejemplo: Fujimori, al inicio del juicio en su contra por violaciones de los derechos humanos, arguyó que cuando asumió el poder, el Perú estaba al borde del abismo e hizo lo necesario para recuperar la estabilidad económica y política; los muertos de Barrios Altos y La Cantuta eran poco más que un ‘exceso’, el ‘daño colateral’ que produce toda guerra. Lo que se olvida en ese argumento es que las personas asesinadas en Barrios Altos, entre ellos un niño de 8 años, no estuvieron en una batalla sino fueron víctimas civiles, desarmadas. Los estudiantes y el profesor de La Cantuta tampoco perdieron la vida en un enfrentamiento; los sacaron de sus dormitorios en medio de la noche y fueron brutalmente torturados y asesinados, sus cuerpos quemados y desmembrados para que no quede rastro de ellos. Es más, tal como argumentaron los Magistrados en la sentencia contra Alberto Fujimori, no existe evidencia alguna de que las víctimas estuvieran involucradas con Sendero Luminoso. La violencia ejercida por el Estado tuvo otros fines: de amedrentar a la población, de silenciar a la sociedad civil, de controlar el espacio público, y de tal manera minimizar las posibilidades de oposición a un proyecto profundamente autoritario y corrupto.

Aún escucho a muchas personas justificar estos asesinatos diciendo que fue el precio que se tuvo que pagar para eliminar la subversión. Tal argumento no resiste el mayor análisis. Pero es un sentido común que persiste en la sociedad, alimentado desde el poder en la década de los noventa, y al que las autoridades y otros sectores recurren cuando les es conveniente. Cuando Keiko Fujimori dice: “Si en los noventa derrotamos (sic) la subversión, por qué ahora no vamos a poder derrotar la delincuencia? ¡Con mano dura!”, está apelando justamente a ese sentido común.

Pero esa no es toda la historia. Hubo una lucha social y política contra la dictadura de Fujimori, como describo en el capítulo 10 del libro (y sobre la cual queda mucho por investigar y escribir), que intentó recuperar la democracia en el Perú. Hubo una Comisión de la Verdad y Reconciliación que estudió a fondo las causas y consecuencias de la violencia política en el país, y que retó fundamentalmente estos argumentos y este sentido común. Hubo un 7 de abril de 2009 en que un tribunal de la justicia peruana encontró culpable a Alberto Fujimori como autor me-

diato de crímenes de lesa humanidad y lo sentenció a 25 años de prisión. Eso es lo que está en juego no solo en estas elecciones: las memorias en disputa, memorias sobre lo que pasó y por qué pasó, sobre quiénes son los responsables y qué hacer para que nunca más vuelvan a ocurrir las violaciones de los derechos humanos y el autoritarismo.

\* \* \*

Quiero manifestar mi profundo agradecimiento a las tres instituciones que hicieron posible la publicación de esta segunda edición de *Violencia y autoritarismo en el Perú*: el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER), y el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), y en particular a las personas en cada institución que apoyaron esta reedición: Marcos Cueto y Mariana Egueren en el IEP; Roger Aguero y Javier Torres del SER; y José Pablo Baraybar y Gisela Ortiz Perea del EPAF. También quisiera agradecer a Odín del Pozo por su excelente trabajo de edición. Finalmente, agradezco a los amigos peruanos y peruanas con quienes he tenido el privilegio de trabajar en los últimos años: su inteligencia y creatividad me inspiran; su compromiso con la democracia, los derechos humanos y la justicia social me convoca; y su afecto y amistad me sostienen aún en los momentos más oscuros de la realidad que nos ha tocado vivir. Dedico este libro a mi hijo Simón, quien me acompaña en mis andares en el Perú con afabilidad y entusiasmo, y que me recuerde siempre lo que más importa en la vida.